

## Políticas de información gubernamentales en contextos de crisis: el caso del *Prestige*

Víctor Sampedro Blanco (URJC) José A. López Rey (UNEX)

Después de una semana de incompetencia política en la gestión de la crisis, en noviembre de 2002 se hundía el petrolero *Prestige*. La actuación gubernamental despertó una movilización sin precedentes puesto que, junto a las protestas políticas (que enlazarían con las iniciadas antes por los estudiantes y los trabajadores y con las casi contemporáneas contra la guerra) se produjo una acción solidaria multitudinaria que llevaría a miles de ciudadanos a limpiar las playas.

En esta comunicación analizamos uno de los temas que más consenso popular suscitó en contra del Gobierno, el de la gestión de la crisis del *Prestige* y la movilización social subsiguiente, ya que ilustra de manera paradigmática la política de comunicación llevada a cabo por el Ejecutivo en contextos de crisis. Desvelaremos los procesos de desactivación electoral de dicho tema y detallaremos las estrategias de blindaje gubernamental. Presentamos, por último, un análisis de la cobertura que ofrecieron los tres principales diarios de difusión estatal en el año siguiente a la catástrofe, que evidencia la marginación del tejido social por los medios de comunicación españoles.

La urgencia de estas cuestiones resulta obvia. La ciudadanía se manifestó debido a la incompetencia de los gobiernos demandando responsabilidades políticas y recursos para evitar unas catástrofes ecológicas que ya parecen periódicas. La respuesta del Gobierno fue atacar la movilización hasta el punto de criminalizarla. Al mismo tiempo ejerció un férreo control sobre la información disponible, privando a los medios de sus fuentes habituales para elaborar las noticias. Éstos establecieron una relación simbiótica con los partidos. El resultado fue que la movilización no tuvo el impacto esperado en las elecciones municipales y autonómicas, que apenas comportaron el retroceso del Partido Popular. Ésta, no obstante, se mantuvo latente y coadyuvó a su derrota el 11 de Marzo.

### 1. Los hechos.

Mientras el *Prestige* seguía un rumbo errático y el petróleo impactaba en la costa con cada marea, los responsables institucionales se habían ido de cacería o a esquivar. No existían medios para remolcar el buque, ni puerto de abrigo donde trasvasar la carga. La demora en el salvamento se debió a presuntas negociaciones al alza con las compañías subcontratadas para el remolque. Los responsables directos no aplicaron el Plan Nacional de Contingencias (previsto desde 1993 y en vigor desde 2001) pero, en realidad, ficticio.

El *Prestige* fue una tragedia anunciada, cuyo cumplimiento no obedecía a la improvisación o al azar, sino a la dejación premeditada. Con casi la misma periodicidad que el Jubileo, se han hundido o accidentado buques con cargas tóxicas en las costas gallegas. Pero los fondos públicos destinados al Camino de Santiago no se aplicaron nunca al corredor marítimo de A Costa da Morte. El nulo desarrollo de la legislación de salvamento marítimo permitió a la *Xunta* y a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente escamotear sus responsabilidades. Los organismos competentes no habían sido creados o bien carecían de los medios mínimos para dar una respuesta efectiva. Tampoco existía un solo buque o barrera anticontaminación en Galicia, en la línea de reducir al Estado a costa de lo que sea impuesta por las políticas de Rato. En consecuencia, la *gestión* de la crisis consistió en declinar responsabilidades y negar la realidad.

Pero la realidad era la llegada masiva de chapapote. 2.600 kilómetros de costa (1.000 de ellos en Francia) se vieron afectados. La única decisión de las autoridades fue mandar el buque «al quinto pino», donde la impunidad jurídica fuese total. Francia y Portugal impidieron, recurriendo a sus Armadas, que el buque siniestrado se acercase a sus costas. La jibarización del Estado y la ilegalidad, o pura ilegalidad, de la economía del petróleo (casi doce banderas de conveniencia aseguraban la impunidad de otras tantas empresas fantasma) sumieron a la población en la indefensión. El *Prestige* recorrió más de 1.300 kms. antes de hundirse, 63.000 toneladas de fuel se dispersaron sobre un millón de kilómetros cuadrados de mar; el doble de la superficie del Estado Español, según el centro francés *Le Cedre*.

Ningún alcalde se ofreció a guarnecer el *Prestige* para trasvasar la carga, aunque es la única solución contemplada en los protocolos oficiales para estos accidentes. Se prefirió, según el conselleiro de Pesca, repartir entre todos un poco del vertido (11-11-2003). En realidad, un perímetro de entre 30 y 40 kms. de la costa gallega está asfaltado (aunque no se vea) y en el segundo aniversario de la catástrofe sigue llegando fuel (La Voz de Galicia 11/11/04).

Dos hechos revelan el erróneo concepto de seguridad nacional manejado por la clase política. Primero, para evitar la sensación de emergencia nacional, y en consonancia con la estrategia de negar la catástrofe, los soldados no fueron movilizados. Mientras, varios militares belgas, llegados a A Costa da Morte la primera semana, volvieron a su país cansados de esperar a un mando español que los coordinase. Hasta pasadas tres semanas no hicieron su aparición los efectivos de las FAS, empeñadas en llevar la Guerra contra el Terrorismo a Irak. Segundo, la Delegación del Gobierno en Pontevedra desconvocó las asambleas de las cofradías de la Ría de Arousa, que se estaban preparando para la llegada del fuel convenciéndolas de que no había marea negra, justo dos días antes de que llegara.

En la gestión de la crisis ni siquiera se sopesaron cuestiones de salud pública. Los datos de las organizaciones ecologistas son contundentes: «Resulta ilustrativo comparar el periodo de cierre [de las actividades en el mar] en Galicia con los establecidos en otras mareas negras como la del *Braer* (1993), en las islas Shetland. Tras este accidente, la captura de crustáceos (exceptuando la cigala) se abrió a los 22 meses, la de moluscos (exceptuando la del mejillón) a los 25 meses, y la de la cigala y mejillón a los 7 años; en el caso del *Erika*, en la Bretaña francesa (1999) el cierre se prolongó entre 2 y 18 meses» (WWF/Adena, 2003: 3). Y, encima, la degradación lenta del vertido del *Prestige*, viscoso e insoluble, prolonga su contaminación más que en esos casos precedentes. En un alarde de irresponsabilidad que roza lo surrealista, la rápida vuelta a la normalidad se explica desde la *Xunta* gracias al trabajo de los marineros, ahora asumido como un éxito institucional (*El País*, 13 de noviembre de 2004: 28).

## 2. La marea de movilizaciones.

En lo más crudo del invierno de 2002, más de medio millón de voluntarios acudieron a las costas a (intentar) limpiar chapapote<sup>165</sup>. Por otro lado, fueron cientos de miles los manifestantes convocados por *Nunca Más*. La gente se movilizó por sentido común, en defensa de su derecho a la supervivencia, al medio ambiente y la salud, además de por pura indignación por la inacción de los gobiernos ante los sucesivos impactos de petroleros en la costa. *Mariñeiros*, *mariscadoras*, *redeiras* y voluntarios tejieron una red espontánea de solidaridad (la *Xunta* había contabilizado el primer año más de 330.000 jornadas de trabajo de los voluntarios, casi las mismas que las del personal contratado —*La Voz de Galicia*, 13-11-03: 23—). La respuesta real provino de la sociedad civil, autoorganizada en las plataformas *Nunca Más* y los grupos de voluntarios, en la Península y en Europa. Así lo reconoce, al menos, la opinión pública gallega que valoraba a *Nunca Más* muy por encima de las instituciones y reconocía a los voluntarios como quienes realmente limpiaron las playas (*La Voz de Galicia*, 13-11-03: 1-4).

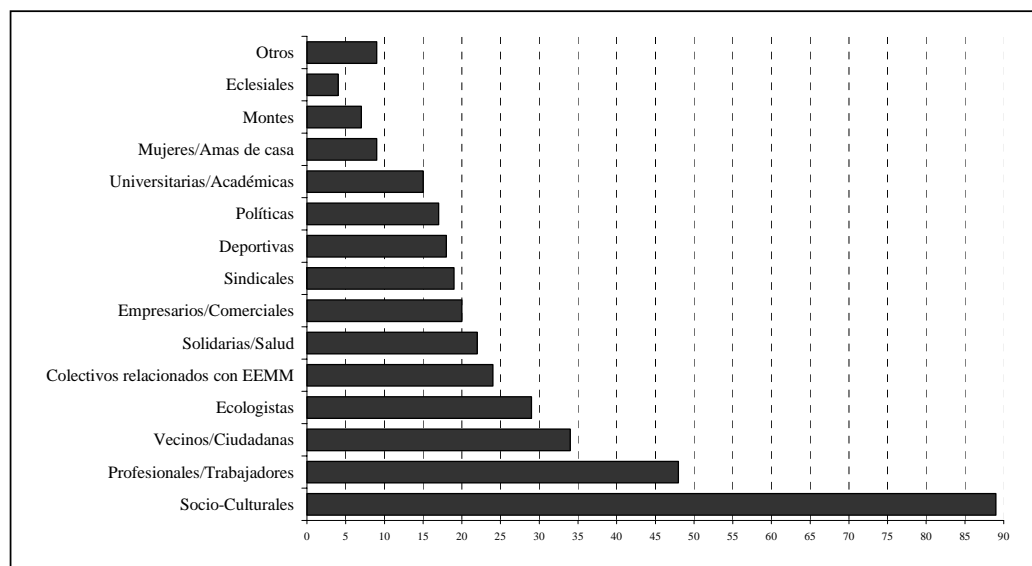
*Nunca Más* de Galiza (NM, de aquí en adelante) agrupó inicialmente a unas doscientas asociaciones y no cesó de crecer hasta integrar a más de 360 en la actualidad. Abundan las organizaciones ecologistas, solidarias, políticas y sindicales, pero son sobre todo las de tipo socio-cultural, así como las relacionadas con el sector marinerero (de tipo profesional, empresarial, comercial y de trabajadores) las que constituyen su base más sólida. El lema provenía de las movilizaciones contra el *Aegean Sea*, el penúltimo petrolero hundido en las costas gallegas. La composición de NM revela que atravesó las fronteras sociológicas del campo y la ciudad, filiaciones políticas (incluso miembros del PP participaron en un comienzo), rompiendo barreras generacionales y sectores profesionales (con sus colectivos de educación —*Area Negra*—, profesionales del Derecho —*Xustiza Negra*—, las artes —*Burla Negra*—, etc.). Es simplista, por tanto, la imagen de NM como movimiento urbano, antítesis de la Galicia *profunda*.

<sup>165</sup> Esta es una estimación conservadora. Un impreso oficial del municipio, señala que en Carnota habían llegado unos 90.000 voluntarios hasta abril de 2003. A Muxía, Fisterra o Camariñas pudieron llegar otros tantos o más. Los municipios menos afectados de la ría de Vigo acogieron a más 11.000 voluntarios en Navidad. Estas cifras sumadas a las de otros puntos de la costa del Cantábrico, alcanzan con creces el medio millón de voluntarios. Tres gráficos de informes secretos del Ministerio de Defensa muestran la abrumadora presencia del voluntariado (20.000) hasta el día 9 de diciembre. En cada uno de los fines de semana de ese mes se contabilizan, al menos, 15.000 voluntarios. Superaron a las FAS y al personal contratado durante todo el mes de enero y su presencia fue mayoritaria sólo en los fines de semana de febrero.

NM adelantaba algunos rasgos que se reproducirían en las manifestaciones contra la guerra. Las protestas fueron convocadas por los artistas de Burla Negra y sus actividades carecieron de liderazgo político. El ciclo de protesta arrancó con los voluntarios y las plataformas NM surgidas en lugares remotos. Tuvo su clímax en la primera manifestación antibelicista celebrada simultáneamente en todo el mundo y que alcanzó la máxima asistencia registrada hasta entonces. El 15 de febrero los foros sociales del movimiento antiglobalización tomaron cuerpo en todo el mundo. La prensa norteamericana denominaba a los manifestantes como *la opinión pública internacional* (*El País Semanal*, 16-3-2003: 58). Una semana más tarde, NM, coincidiendo con el aniversario del 23F, convocaba en Madrid otra manifestación, también sin precedentes.

Los rasgos comunes entre estas protestas y el altermundismo son varios: recelo ante la instrumentación partidista, recursos ante los medios de comunicación, nuevos repertorios de acción simbólica y una capacidad de movilización que supera con creces a la de los grupos convocantes, utilizando para ello las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC). Las reivindicaciones políticas fueron básicas, rebasando el encuadramiento en unas siglas partidarias: Dimisión de los gobernantes, por sus decisiones políticas contrarias a la opinión pública y a los intereses de la ciudadanía; y por su impotencia, también, para gestionar los riesgos medioambientales. Políticas públicas de prevención de riesgos, o que al menos no los aumentasen, e instancias de fiscalización y sanción jurídico-legal, exentas de veto gubernativo.

Gráfico 1. Colectivos que integran *Nunca Más* (en noviembre de 2004). Fuente: *Nunca Más* (<http://www.plataformanuncamais.org/quensomos.php>); elaboración J.A. López Rey



Irak. Después, cuando se pensaba haber frenado definitivamente la marea de movilizaciones, ésta demostró la dificultad de poner puertas al mar.

### 3. El dique electoral

Antes de detallar el escaso impacto de las movilizaciones en las urnas, necesitamos precisar el balance electoral del 25 de mayo. Las listas de izquierdas lograron más votos que el PP; también en Galicia, donde la derecha no perdía unas elecciones desde la década de 1930. En caso de haberse celebrado unas elecciones autonómicas, con el mismo voto que el emitido en las municipales gallegas, el PSOE y el BNG juntos superarían en 3 escaños al PP; frente a la ventaja de 7 escaños de este partido en el Parlamento actual de Galicia.<sup>166</sup> Este vuelco no es conocido por la ciudadanía. No sólo el Gobierno evitó dar este

<sup>166</sup> El cuadro adjunto detalla los votos y escaños del Parlamento gallego actual (el emanado de las últimas elecciones autonómicas de 2001) y el que saldría de unas elecciones en las que los tres partidos con representación parlamentaria obtuviesen idéntico resultado al de las últimas elecciones municipales. La proyección de escaños sólo tiene en cuenta los votos de los tres partidos con representación parlamentaria

mensaje, sino también la oposición, enfrentada en una pugna interna. Las desavenencias, acentuadas en el fracaso de algunos pactos postelectorales y transfuguismos varios (como en Vigo, Sada, etc.) acabarían por desdibujar la única coalición (PSdG y BNG) capaz de presentar una alternativa de gobierno al PP.

De todos modos, resulta difícil de entender que quienes se manifestaron contra el Gobierno en las calles no lo hubieran hecho con la misma contundencia en las urnas. Tomar la voz y expresarse con el cuerpo conlleva más costes y riesgos que emitir un voto; más aún, con los recortes de los derechos de expresión que luego detallaremos. Al margen de las peculiaridades de las elecciones locales, hay que tener en cuenta la desconexión de la campaña electoral con los problemas que afrontaba el país. La versión dominante señalaba que el Prestige y la guerra eran temas demasiado alejados de las preocupaciones reales de la ciudadanía. Ésta, sin embargo, no debió de verlo así, cuando acudió a recoger veneno con las manos. Más bien las urnas evidenciaron la incapacidad del tejido social para innovar las agendas políticas y la impermeabilidad de estas últimas respecto a los sectores sociales más activos y, sin embargo, desmovilizados electoralmente en mayo de 2003.

En efecto, durante la campaña de las municipales la oposición se centró en la pugna de votos, pero no atrajo a los jóvenes ni recuperó el electorado crítico que perdió en 1996 y que se recluyó en la *abstención en 2000* (Crespo, 2004). *El Gobierno, en cambio, movilizó como nunca a su electorado más fiel, presentándose como víctima de un plan desleal de acoso y derribo.*

Tras el regreso de la cacería que le ocupó el fin de semana cuando se remolcaba el Prestige, Manuel Fraga argumentó que «No hay mal que por bien no venga». El bien eran las ayudas mordaza (aceptar las indemnizaciones que tramitaba la Xunta suponía la renuncia expresa a realizar reclamaciones posteriores) y una inversión propia del desarrollismo tardofranquista: multinacionales de la acuicultura, carreteras y un Parador de Turismo en A Costa da Morte, que todos los alcaldes populares prometieron construir, pero cuya existencia es tan fantasmal como la del puerto de abrigo coruñés o las líneas férreas de alta velocidad. El Plan Galicia sirve en la actualidad, tras evidenciarse el globo de aire que constituía al carecer de dotación presupuestaria, para que Fraga pueda reclamar su cumplimiento a un gobierno socialista obligado a pagar los platos rotos (El País, 13 de noviembre de 2004: 28).

Pero «en los pueblos saben que hemos hecho todo lo que hemos podido y que hemos puesto el dinero encima de la mesa» (El País, Domingo, 19 de enero de 2003: 7). Estas declaraciones de Manuel Fraga revelan la principal estrategia electoral del PP gallego y la mayor trampa para la oposición. Con el «dinero encima» de algunas mesas se aseguraba el voto de los sectores económicos más afectados. A la oposición sólo le quedaba compartir el protagonismo en la entrega de las ayudas, como hizo el alcalde de A Coruña. La otra alternativa era denunciar las ficciones contables del inexistente Plan Galicia y exigir más ayudas. Algo que, de enfatizarse en exceso, podría despertar agravios comparativos con otras autonomías en liza electoral. En todo caso, se juzgó como suicida «dañar» a los sectores indemnizados,

---

en la actualidad, excluyendo el muy improbable escenario de que un cuarto partido consiguiese entrar en la cámara autonómica.

#### AUTONÓMICAS 2001

	A CORUÑA		LUGO		OURENSE		PONTEVEDRA	
	Votos	Escaños	Votos	Escaños	Votos	Escaños	Votos	Escaños
PP	296734	12	124042	9	121073	8	250036	12
BNG	146816	6	43245	3	42780	3	113582	5
PSOE	139662	6	47838	3	40695	3	106624	5

#### MUNICIPALES 2003

	A CORUÑA		LUGO		OURENSE		PONTEVEDRA	
	Votos	Escaños	Votos	Escaños	Votos	Escaños	Votos	Escaños
PP	242321	11	116401	8	118279	8	218539	10
BNG	127024	5	34464	2	39733	3	124271	6
PSOE	193748	8	76897	5	50840	3	130971	6

Elaboración: Xabier Meilán Pita.

aunque éstos tengan comprometido su futuro, como indican los planes de reducir la flota gallega en un 40%.<sup>167</sup>

La oposición, con excepciones individuales, pecó de cortoplacismo centrándose en la carrera electoral. El nacionalismo quiso capitalizar la indignación del electorado gallego y no cedió suficiente protagonismo a la sociedad civil española y extranjera. El PSOE y el PSdG jugaron con ambigüedad. En Galicia se debatía entre el apoyo informal a la protesta y las críticas de Francisco Vázquez a la plataforma ciudadana, según él, «dirigida por radicales e independentistas» (13-1-2003) e identificada con la kale borroka. Fuera de ella sus cargos se sumaban a título individual y sus organizaciones de votantes intentaban cooptar las plataformas provinciales.

Para entender cómo la oposición no derrotó a unos gobernantes que demostraron niveles de indolencia y prepotencia difíciles de igualar es necesario, además, tener presentes algunas cuestiones: En primer lugar, los fondos destinados a la seguridad marítima habían sido reducidos con su aquiescencia. En segundo lugar, es difícil denunciar el pago inmediato de ayudas, aunque sean leoninas, cuando todavía estaban pendientes de pago algunas indemnizaciones por el hundimiento del Aegean Sea en 1993.

Se impuso, pues, la lógica electoral y se recompuso el ecosistema caciquil. En esta tarea, el PP dispuso de más resortes y mostró mayor cohesión que la izquierda. Y frente al papel jugado por la oposición parlamentaria, NM hacía visible una sociedad civil que, ante la sorpresa de sus supuestos portavoces, denunciaba el legado tardofranquista que le atenazaba. NM, sin embargo, sería responsable de dos fallos estratégicos. El primero, enfrentarse al PP gallego, sin aprovechar las fisuras que se abrieron en su seno y sin extender la crítica a la oposición que sólo peleó por «su» electorado. El segundo error sería no reconocer en toda su importancia el papel del voluntariado, cuyo apoyo habría mantenido en el tiempo y extendido geográficamente las reivindicaciones de la plataforma. Por último, es necesario constatar que la paralización de las convocatorias durante la campaña electoral prueba una contradicción de base: que no era un juguete en manos del BNG, pero que tampoco tenía recursos ni un discurso radical (de raíz) para lograr que el Prestige focalizase las elecciones. Ahora bien, estas críticas deben ser presentadas en un marco de reflexión más amplio, en el que se atienda al proceso por el cual el Gobierno laminó cualquier tipo de voz crítica.

#### 4. La esfera pública bunkerizada.

La crisis del *Prestige* no tuvo a corto plazo los efectos políticos esperados porque en la esfera pública se desarrollaron procesos de claro perfil antidemocrático. Los barómetros del CIS señalan que el *Prestige* y la guerra, temas prioritarios a la altura de enero y febrero, perdieron importancia en la agenda de problemas del país antes de las elecciones. Las recetas que proveen los expertos en comunicación de crisis se cocinaron en una dieta de desinformación impresionante. Se cercenaron las fuentes institucionales que podrían fiscalizar al poder Ejecutivo y alimentar el flujo de noticias de los medios convencionales. Se mintió recurriendo a campañas autopromocionales y de criminalización de la disidencia. Un auténtico búnker parecía blindar a los gobernantes que emplearon sus resortes en una esfera pública supuestamente democrática. El «retiro digno» que solicitaba Manuel Fraga para poner fin su vida política fueron las trincheras fortificadas que negaron la separación de poderes y la libertad de expresión.

Los frentes de la batalla fueron las cámaras parlamentarias, los tribunales de justicia, las comunidades científicas, los medios de comunicación y la misma sociedad civil. Se los eliminó como fuentes habituales para la elaboración de la información por parte de los periodistas, obligando a éstos a acudir a los datos oficiales como único recurso legitimado.

En efecto, los **parlamentos** de Estrasburgo, Santiago de Compostela y Madrid fueron bloqueados. La ausencia de siete diputados socialistas (embarcados en actos de campaña electoral) impidió materializar el primer intento de constituir una comisión de investigación en el Parlamento Europeo. Y han sido necesarios cinco intentos posteriores, con el impulso de NM y de la ONG Voluntarios sin Fronteras, para constituir una comisión europea bastante limitada, sujeta al veto del Grupo Liberal y que estudiará conjuntamente las tragedias del *Prestige* y el *Erika*. El Parlamento de Galicia demostró su inanidad ante la negativa de los responsables del Ejecutivo central a comparecer ante él. Y las Cortes Españolas aplicaron el rodillo de la mayoría popular para abortar cualquier comisión en su seno. Como síntoma del nivel de democracia parlamentaria española, baste señalar que las únicas comparecencias de algunas autoridades se produjeron ante la comisión que el Parlamento francés abrió por la llegada de fuel a las

<sup>167</sup> El Conselleiro de Pesca, E. López Veiga, no confirmaba este porcentaje, pero señalaba que la reconversión del sector era imprescindible, porque «en el mar no caben todos». *El País*, Domingo, 1 de septiembre de 2003: 50.

Landas. No obstante, el 10 de diciembre de 2004 el Tribunal Constitucional falló a favor del BNG y del PSdG obligando al Parlamento de Galicia a reabrir su comisión de investigación. Se perfila entonces un nuevo escenario en el que por vez primera los altos cargos de la Administración Central podrán ser interpelados públicamente.

Pero en 2003 el cierre del frente político dejaba a los **tribunales** como la única arena institucional donde exigir responsabilidades y, también, como la única fuente independiente legitimada para ofrecer noticias. La inexistencia de los organismos encargados de gestionar los accidentes marítimos permitió que la Xunta y los Ministerios de Madrid eludiesen toda responsabilidad y remitiesen las imputaciones a cargos individuales, cuya actuación no constaba por escrito. El Ministerio de Fomento declaró que «todas las órdenes de alejamiento del buque» habían sido orales. Era, por tanto, inviable aplicar al Gobierno el Derecho Administrativo. Dos años más tarde, sólo están imputados por los tribunales de justicia españoles el capitán del Prestige, su primer oficial, el jefe de máquinas y el director de las operaciones de rescate de la armadora, así como el ex Director General de la Marina Mercante.

Solamente quedaba un aspecto no controlado por el Gobierno, habida cuenta de que los políticos españoles podrán ser requeridos en los tribunales extranjeros. La fiscalía de Brest instruye una causa para determinar las responsabilidades de la catástrofe, pudiendo comparecer cargos públicos españoles ante organismos extranjeros. En cualquier caso, dicho proceso tendría una visibilidad mínima en los medios de comunicación en comparación con los anteriormente mencionados.

Eliminados los políticos y los jueces como fuentes burocráticas que permiten elaborar rutinariamente la información, los medios contaban sólo con los **expertos**. El Ministro Rajoy adoptó de nuevo la estrategia empleada con las vacas locas; antes ensayada en Doñana. Designó un reducido grupo de expertos y técnicos que monopolizaba la información. Poco importó denunciar que la comunidad científica nunca fue consultada antes de alejar el buque, que los informes presentados eran traducciones de los elaborados sobre el Erika o que no existía ningún informe de la solidificación del fuel. Su publicación, en cambio, respondía a la necesidad de exculpar a los gobernantes. Mariano Rajoy declaraba en el aniversario anual del hundimiento del Prestige: «No volvería a hablar de los hilillos, pero yo leí el informe que me dieron» (La Voz de Galicia, 13 de noviembre de 2003: 7).

Los técnicos del Nautilo, el batiscafo contratado para reparar el pecio del buque, trabajaron al dictado gubernamental con informes confidenciales y exclusivos. El flujo de fuentes autorizadas fue, así, canalizado en un embudo. 400 investigadores españoles publicaron en la revista Science una carta de protesta por la marginación de la comunidad científica. Pero las presiones sobre los grupos universitarios y los centros científicos censuraron el flujo de información. Los datos que se publicaron un año más tarde seguían procediendo del Cedre francés y del Instituto Hidrográfico de Portugal. El Instituto Oceanográfico Español apenas informaba sobre la contaminación y, aún así, sus informes más comprometedores fueron retirados de su página web. La deriva de recursos públicos para el blindaje del Gobierno continuaba un año más tarde, amenazando la posibilidad de alcanzar un conocimiento real de la catástrofe. Las ayudas a la investigación se han repartido entre todos los grupos solicitantes, impidiendo la posibilidad de formar equipos adecuados a la dimensión del objeto de estudio. El seguimiento de la salud de los voluntarios y afectados por el fuel es prácticamente inexistente. De igual modo, cuando se cumple el segundo aniversario, se anuncia por fin que las operaciones de extracción del fuel han concluido con éxito. Pero informes realizados por expertos independientes cuestionan tal afirmación y calculan que en lo que queda del Prestige hay entre 16.000 y 23.000 tm. de crudo. Greenpeace, por su parte, continúa denunciando la falta de un informe detallado de impactos. Los científicos españoles celebran el cumpleaños lamentándose de que en lugar de hacer catas sistemáticas, se gasta el equivalente a su presupuesto para investigación en vídeos de los fondos marinos; de lo que se mueve en la superficie pero no de lo que hay dos metros bajo la arena (El Mundo, 13 de noviembre de 2004: 16).

Continúa, por tanto, la censura científica con la misma cerrazón que durante el periodo de las elecciones municipales. En la última semana de la campaña de las elecciones municipales resultó imposible publicar tres informes confidenciales que desvelaban los riesgos para la salud que comportaba la normalización de la situación (Cabrera Varela y García-Allut, 2003 y **La Voz de Galicia**, 13 de noviembre de 2003: 7). Resulta interesante apuntar cuándo y cómo conoció la opinión pública estos informes, porque ilustra el uso gubernamental de las exclusivas periodísticas sobre cuestiones técnicas. El 12 de noviembre de 2003, El Mundo publicaba en primera página: «Agentes cancerígenos del Prestige, detectados en la cadena alimentaria». En la página 12 el lector encontraba una retahíla de términos ininteligibles, trufada de declaraciones oficiales que desmentían esos informes. El día siguiente los titulares de El Mundo eran: «Sanidad: No hay riesgo de consumir productos de Galicia» y «Arenas niega que haya algún accidente en la cadena alimentaria» (El Mundo, 13 de noviembre de 2003: 8). La estrategia parece clara, un día antes del aniversario, un diario próximo al Gobierno se adelantaba a la presentación de un informe de la

Universidad de A Coruña, existente desde hacía medio año. El periódico aumentó las ventas, pero su anticipación impidió que el informe enturbiase la celebración del aniversario. La inundación posterior de declaraciones oficiales invalidó esos datos. Los únicos que, además, podrían resucitar el tema en la opinión pública.

El suministro de exclusivas alcanzó también a los medios más críticos en la cobertura del Prestige. También el 12 de noviembre resultaba sospechoso que El País, con una llamada en primera página, ocupase la página 12 con «Las imágenes que grabó Fomento» del remolque del petrolero. Sin contenido informativo alguno, ya que apenas se reconocían los personajes, esas fotos eran, sin embargo, una exclusiva difícil de rechazar. El mismo texto descubría su procedencia: «siguen siendo un secreto bien guardado en el Ministerio de Fomento». También anecdóticas, pero exclusivas, fueron las imágenes del Nautilo que emitieron los telediarios de Tele 5 del mismo día 12 de noviembre. En suma, el Gobierno privó de fuentes políticas, jurídicas y científico-técnicas a los medios, abriendo el flujo de las últimas a su antojo. La estrategia con los medios fue tan simbiótica (beneficiosa para ambos, a costa del conocimiento público) como coercitiva con la población.

Quedaban dos frentes por controlar: las mareas del **fuel** y de la ciudadanía. El Gobierno se empleó en negar la primera y acosar a la segunda.

En efecto, incluso el Defensor del Pueblo llegó a señalar (aunque con tono atemperado) la descarada y manifiesta manipulación informativa (El País, 19 de noviembre de 2003: 23 y 24). Los medios públicos (RTVE, RTVG) y los aliados mediáticos del Gobierno (Antena 3, radios y diarios afines) transmitieron una imagen de normalidad a la que sólo se oponían «los radicales y los oportunistas». Los entes públicos difundieron mentiras de tal calibre, que sus reporteros debieron trabajar alejados de las zonas costeras para evitar ser agredidos. Los comités de empresa denunciaron manipulaciones, censuras y listas negras de profesionales.<sup>168</sup> Pero lo que contaba es que el Gobierno inundó la esfera pública de comunicados. La minimización continua de las mareas negras («hilillos», «galletas», «lentejas» de fuel...) y la euforia por la limpieza de las playas («esplendorosas») mostradas por TVE, convirtieron el esclarecimiento de la verdad en una proeza. La prioridad periodística de citar fuentes institucionales aseguraba su visibilidad, incluso en los medios más críticos. Aunque luego fueran desmentidas en una esquizofrenia informativa sin parangón. Esquizofrenia entre la realidad y los telediarios gubernamentales, entre los telediarios de TVE y Tele 5, entre las versiones del PP y de NM...

Las sucesivas mareas negras no eran la invisible encefalopatía esponjiforme, de ahí que Tragsa limpiase las rocas contaminadas con técnicas empleadas para eliminar pintadas; chorros de arena y agua que erradicaban toda la fauna y flora. Este proceder es también una metáfora. La limpieza cosmética del vertido (el grafiti negro que denunciaba al poder) alcanzó su cénit con la campaña institucional que convirtió el Nunca Más en Galicia Más que Nunca. Las playas del chapapote se transformaron en las idílicas panorámicas de la promoción turística Galicia Viva. Y la mayoría de los medios gallegos abandonaron su, hasta entonces, tono crítico, porque los aumentos por ventas eran menores que la publicidad institucional de la Xunta. Por esta vía también, incluso en los medios más hostiles, los mensajes oficiales seguían marcando la agenda informativa.

Finalmente, había que silenciar a **la ciudadanía**. El frente social desplegado por NM y los voluntarios era el más abierto, plural y dinámico, y por eso se intentó desactivar con toda una batería de medidas. Para tejer la trama de subvenciones, se frenó la marea de voluntarios (y de sus testimonios). Se encargó su coordinación a sucesivas agencias, de creciente incompetencia y mala fe. A mediados de febrero la Xunta creó la Dirección General del Voluntariado, cuya principal misión fue disuadir la llegada de nuevos voluntarios. Se desarrolló una política virtual. Las autoridades autonómicas abrieron una web ([www.concienciasolidaria.org](http://www.concienciasolidaria.org)) en la cual desinformaban sobre las mareas negras, negaban la necesidad de más voluntarios y teorizaban sobre la correcta práctica de la *solidaridad*. Proponían enviar donativos a la Fundación Arao, supuestamente encargada de la *recuperación ecológica*. También se ofrecía un *merchandising* que incluía gorras y camisetas con sus eslóganes. Su principal tarea fue elaborar un listado de todos los voluntarios que acudieron a Galicia para... enviarles el «diploma de voluntario».

Mientras, la hostilidad institucional tocaba techo en la zona cero del desastre. Se prohibió la entrada a Muxía de varios autobuses de voluntarios catalanes, precisamente en un municipio-ícono del triunfo popular en las elecciones. Forzados a colaborar en otros municipios que no eran del PP, interpusieron una demanda judicial al alcalde, que apenas trascendió. El progresivo descenso de voluntarios facilitó la contratación de empleados de la empresa pública Tragsa y de Protección Civil. Los jornales pagados en

<sup>168</sup> Véase, por ejemplo, el *Comunicado del Comité General de Intercentros de RTVE*, Madrid, 13 de diciembre de 2002; seguido de otros sobre la invasión de Irak.

Galicia y el Cantábrico ascendieron a 1.208.226 al año del hundimiento (*La Voz de Galicia*, 13-11-2003, p. 23); la máquina caciquil estaba perfectamente engrasada y funcionando a pleno rendimiento.

Los voluntarios, enmarcados en un programa de intervención y educación medioambiental, habrían revitalizado la costa, también en términos económicos. Pero esa campaña tendría unos objetivos opuestos a los dibujados en los carteles de *Galicia Viva*. La solidaridad medioambiental evidenciaba la ausente *Conciencia Solidaria* de la *Xunta*. Los voluntarios movilizaban a la sociedad gallega, la *Xunta* intentaba convertirla en mediopensionista. Unos rompían las redes clientelares, mientras el Gobierno gallego las retejía. La indiferencia mediática y política ante estos hechos explican el progresivo desaliento del voluntariado y el aguante electoral del PP.

Los voluntarios acabaron sufriendo la criminalización que *Nunca Más* soportó desde su nacimiento. El fiscal General del Estado tramitó (en un solo día) una denuncia de fraude público porque el dinero recogido por la plataforma «no se destinaba a los afectados». Había sido presentada por el sindicato, Manos Limpias, sin apenas afiliados y dirigido por un líder de la ultraderecha. Fue voceada durante días por las televisiones gubernamentales y, en especial, por *La Razón*. La respuesta inmediata de las cofradías y la adhesión de los sindicatos a la plataforma frenaron el ataque. En esa semana de enero NM recaudó cinco veces más dinero del que acostumbraba. Pero ha persistido un peso de desconfianza. Las acusaciones de provecho económico fueron seguidas por las de oportunismo político. Finalmente, el fantasma del nacionalismo secesionista fue invocado, ligado al terrorismo, y no a nivel de declaraciones. Al calor de las movilizaciones contra la guerra, el último fin de semana de marzo explotaron dos cócteles molotov en sendas sedes del PP gallego. Era una acción sin precedentes, no reivindicada por ningún grupo y que en el momento que se produjo desmovilizó conjuntamente las protestas por el chapapote y la guerra. Una guerra que el poder también libraba contra la sociedad civil.

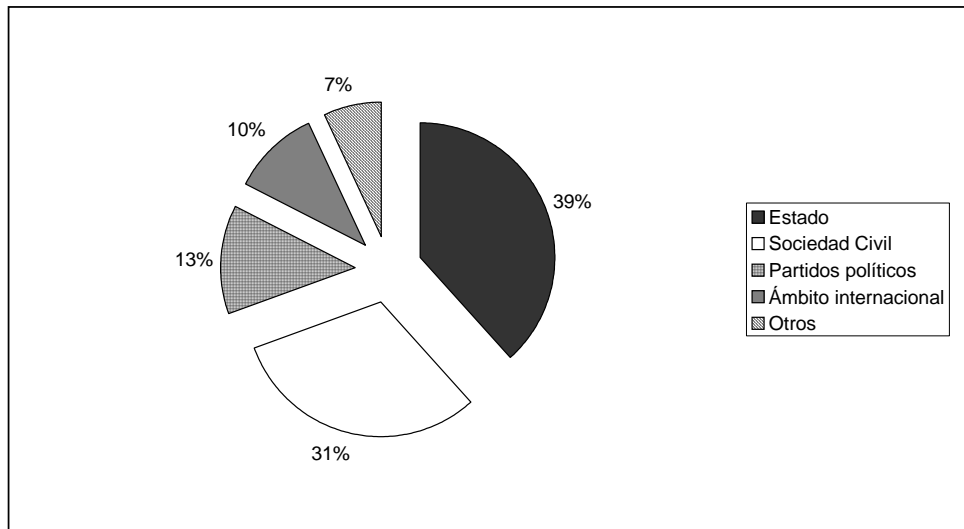
### 5. Otro ladrillo en el muro

Entre los elementos de contención que sirvieron para apuntalar el dique y el búnker, debemos destacar el papel jugado por los medios de comunicación. Presentamos los resultados de un análisis de las noticias de prensa generadas a raíz de la catástrofe del *Prestige* desde el 14 de noviembre de 2002 hasta un año más tarde en tres diarios nacionales: *El País*, *El Mundo* y *ABC*, lo que constituye un total de 2.175 noticias.<sup>169</sup>

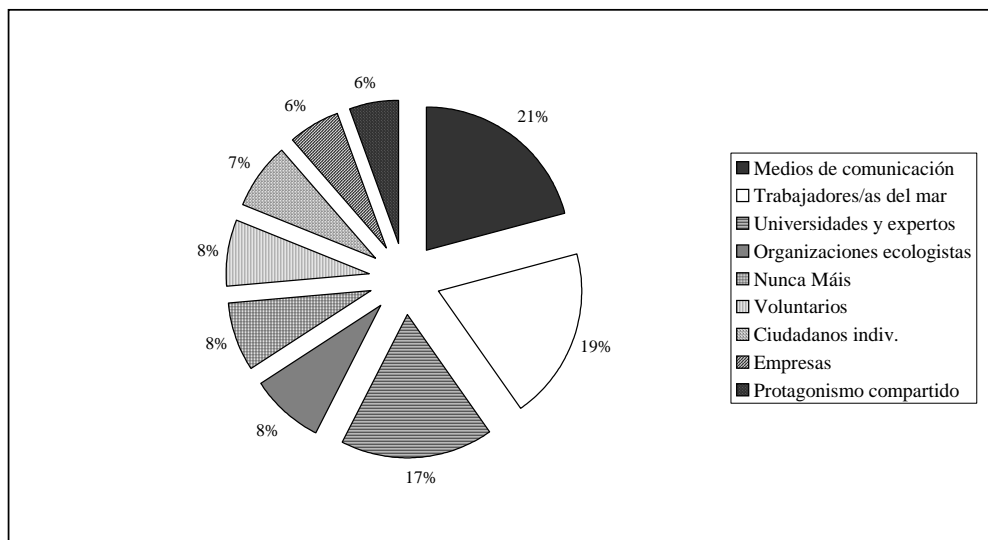
En líneas generales, y en comparación con los partidos políticos implicados en Galicia (PP, PSOE y BNG), *Nunca Más* no recibió un mal trato, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que este tipo de colectivos tienen para lograr visibilidad mediática cuando compiten con otros actores con más recursos simbólicos, económicos y organizativos. Sin embargo, esta es una impresión completamente falsa si en lugar de comparar a *Nunca Más* con el resto de actores político-institucionales lo hacemos con otros elementos de la sociedad civil que fueron objeto de titulares y de portadas durante la crisis. Y es que si el Estado generó el 37% de las noticias, la sociedad civil en general obtuvo un 31% del espacio total en *El País*, *EL Mundo* y *ABC*, a mucha distancia de los partidos políticos (13%) y del ámbito internacional (10%).

---

<sup>169</sup> Se buscaron todas las noticias que incluyeran las voces *Prestige*, *Nunca Más* y *Plan Galicia* en los tres diarios citados y otros dos de tirada regional no gallegos desde el 14 de noviembre de 2004 hasta el 13 de noviembre de 2003. Se codificaron las noticias atendiendo a las variables promotores, fuentes y temática, así como a su estructura y ubicación en el papel impreso. A partir de éstas últimas se creó una escala que medía la importancia objetiva de la noticia otorgada por cada medio (López Rey 2004).

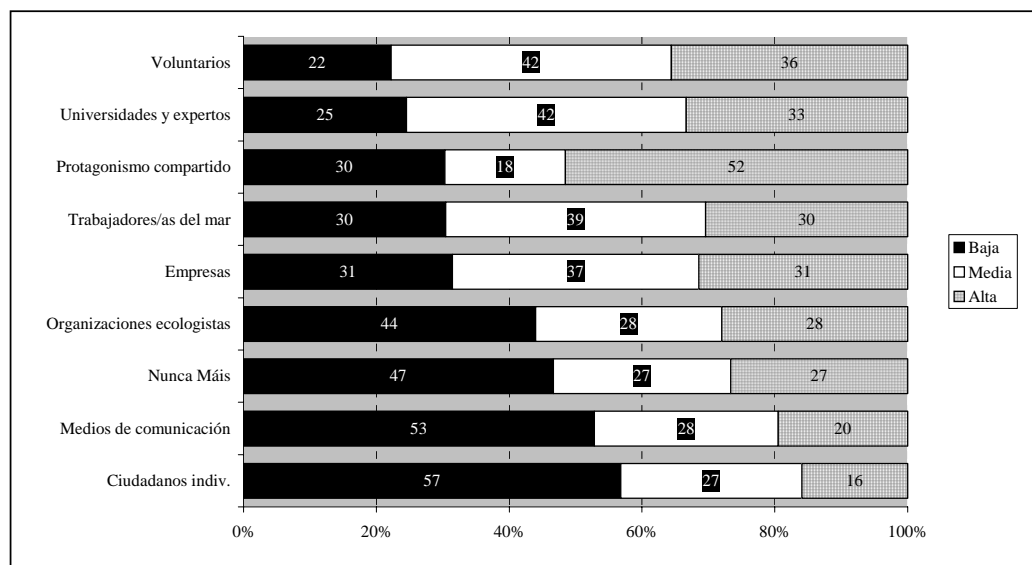
Gráfico 2. Noticias en *El País*, *El Mundo* y *ABC* (n = 2.129). Fuente y elaboración López Rey

*Nunca Más*, con un 8% del espacio concedido a la sociedad civil, quedó por detrás de la opinión de los propios medios (21%), de la cobertura dedicada a los trabajadores y trabajadoras del mar (19%), de las voces expertas de técnicos y universitarios (17%); obtuvo la misma cobertura que las organizaciones ecologistas (muchas de las cuales forman parte de la Plataforma, hecho que no se solía destacar) y que los voluntarios que trabajaban en las playas limpiando el chapapote; y sólo consiguió mejor tratamiento, aunque muy poco, que los ciudadanos que aparecían a título individual (7%) o las empresas (6%).

Gráfico 3. Noticias promovidas por actores de la sociedad civil en *El País*, *El Mundo* y *ABC* (n = 592). Fuente y elaboración López Rey

GRUPO DE TRABAJO 14:  
Comunicación Política.

Gráfico 4. Importancia concedida a las noticias promovidas por la sociedad civil, en porcentaje (n= 592).  
Fuente y elaboración López Rey



Esta *ocultación* de la actividad y planteamientos de la Plataforma es confirmada si atendemos a la importancia objetiva de los titulares en los que ésta fue protagonista, la menor del conjunto de la sociedad civil, sólo por encima de los propios medios y los ciudadanos retratados a título individual. *Nunca Más*, no obstante, es el colectivo que más duramente se posicionaba en contra de la gestión del Gobierno, ya que el 77% de las noticias que protagonizó eran desfavorables o negativas para con los gobernantes, mientras que este porcentaje se reduce en el resto de colectivos.

Los tres periódicos siguieron estrategias de comunicación diferentes en función de sus posicionamientos y alianzas políticas.

*ABC*, obligado a informar de un hecho manifiestamente negativo para su gobierno amigo (en Madrid y en Santiago), adoptó la línea de generar pocas noticias que desprestigiaran a un color político de suyo cuestionado en todos los medios. Aún así, concedió el protagonismo a portavoces del Gobierno, de la *Xunta* o del propio PP antes que a las voces críticas del PSOE, el BNG o *Nunca Más*.

En el tratamiento concedido a la sociedad civil, este medio enfatizó el elemento humano y el solidario de la catástrofe, priorizando las noticias que provienen de quienes más duramente sufrieron las consecuencias (los trabajadores del mar) y de quienes más altruistamente trataron de ayudarles (los voluntarios). Sucedió el hundimiento del buque, como podría haber sido un terremoto o un incendio. Por eso prescinde *ABC* de los grupos que, tanto desde el espectro político como desde el social, pueden cuestionar esta idea del desastre natural, señalar los errores y las causas reales de la crisis y dañar por tanto la imagen del Gobierno. Y como el grueso de la información que ofrece no puede ser positiva hacia

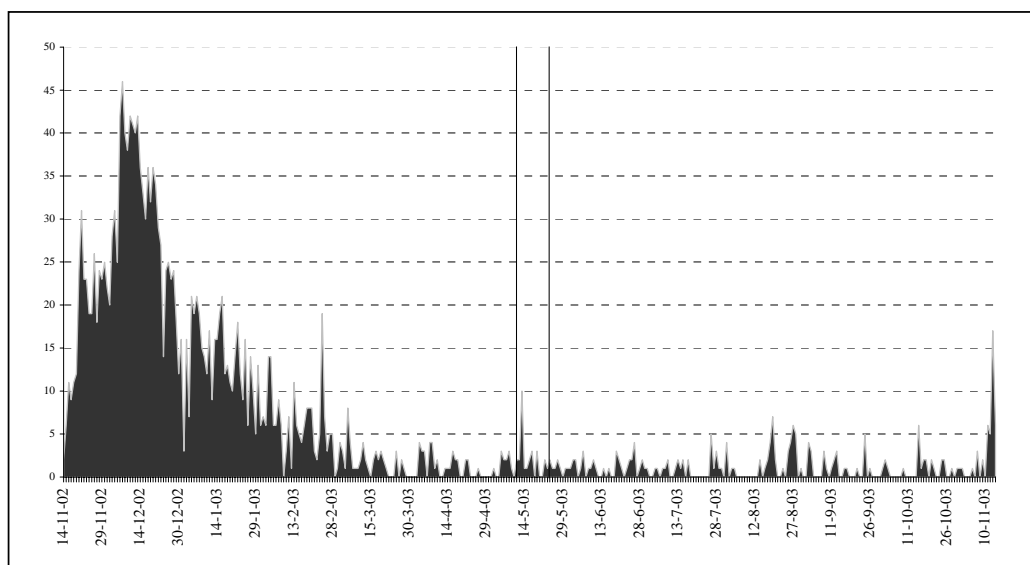
el Gobierno opta por moverse en el terreno de la ambigüedad. Así, casi la mitad de todos sus titulares son neutros o ambiguos con respecto a la acción gubernamental.

*El Mundo* no adopta una postura tan parcial como *ABC*. De hecho, este periódico se caracterizó por ofrecer más cobertura a las voces contrarias a las versiones oficiales, concediendo más espacio al PSOE que al PP y a la *Xunta* entre los actores políticos. También priorizó a *Nunca Más* y a las organizaciones ecologistas antes que a los ciudadanos individuales o a los voluntarios entre la sociedad civil. Por esta razón, en conjunto, *El Mundo* publicó más noticias claramente negativas o críticas con el Gobierno, aunque ciertamente en un volumen muy discreto.

*El País*, finalmente, primó los actores institucionales en el plano político (Gobierno Central y *Xunta* de Galicia) y concedió similar relevancia al PSOE y al PP. Con relación a la sociedad civil, este periódico no mostró especial interés en dar cobertura a actores que, como ONG ecologistas o NM, podían ofrecer discursos elaborados y datos contrastados, quizás por temor a los daños que su protegido político, el PSOE, sufriría *colateralmente*. Recordemos que las organizaciones ecologistas fueron muy críticas con los gobiernos de González, y que *Nunca Más* nació embrionariamente durante una crisis anterior, la del *Aegean Sea*. Aunque no fuese atribuible a una mala gestión política, como en el caso del *Prestige*, sí ocurrió bajo un gobierno socialista (como también el hundimiento del *Casón*, igualmente denunciado por la Plataforma).

Este medio, si bien en su conjunto no fue tan crítico como *El Mundo* (ya que éste publicó un mayor porcentaje de noticias negativas para el Gobierno), ofreció tal cantidad de información que sobrepasó cualquier expectativa, manteniendo el recuerdo de la mala gestión gubernamental durante mucho tiempo. *El País* dedicó a la crisis del *Prestige* 1077 titulares por 605 de *El Mundo* y 493 de *ABC*, cifras que casi ascienden a la mitad del total publicado por los tres periódicos.

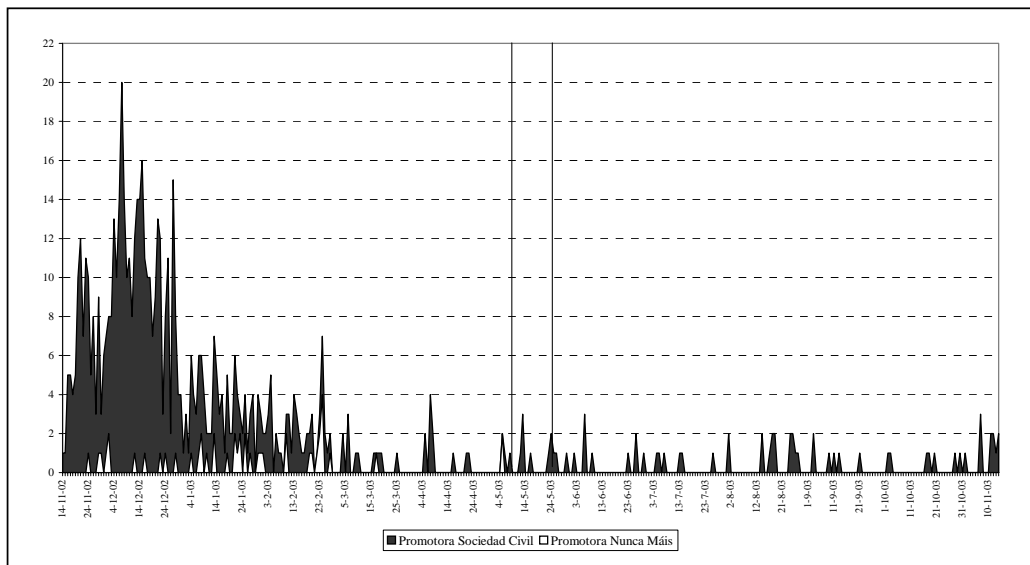
Gráfico 5. Evolución del tema *Prestige* en *El País*, *El Mundo* y *ABC* desde el 14/11/02 al 14/11/03 (n = 2.144). Fuente y elaboración López Rey



Comunicación Política.

En cualquier caso, se constata que el *Prestige* como tema electoral fue desactivado también desde los propios medios. Lejos de lo que cabría esperar tras intensos meses de movilizaciones, el *Prestige* perdió presencia mediática cuando comenzó la precampaña electoral. *Nunca Más*, por su parte, obtuvo su último titular a veinte días de las elecciones. Parfraseando a *Pink Floyd*, se trataba de otro ladrillo más en el muro.

Gráfico 6. Evolución de las noticias protagonizadas por *Nunca Más* y la sociedad civil en *El País*, *El Mundo* y *ABC* del 14/11/02 al 14/11/03 (n= 663). Fuente y elaboración López Rey



## 6. Prietas las filas... hasta la inundación final.

El ciclo de movilización finalizó porque las instituciones acabaron definiéndolo como antisistémico y porque los medios fueron silenciándolo, acallando las voces más críticas. No hubo una sola fisura en el búnker en el que el Gobierno se había instalado. Éste se impermeabilizó cerrando filas ante una oposición que inercialmente esgrimía la necesidad de consenso, cuando el disenso en la calle se manifestaba de forma evidente y las reacciones gubernamentales crecían en hostilidad.

El cierre de la esfera pública comenzó cuando la oposición cambió de bandera. Abandonó el nunca más por el No a la Guerra, más abstracto y lejano. Por tanto, más dúctil y menos comprometedor. Frente al antibelicismo, el PP empleó los mismos recursos de bunkerización que hemos visto aplicados al chapapote. No hubo comisiones parlamentarias, ni fisura alguna en el Gobierno, ni investigaciones judiciales de las decisiones del Ejecutivo, ni retractación de los expertos en armas de destrucción masiva, ni posibilidad de filtrar las imágenes de la devastación de Irak, ni... Para anular al PSOE bastó con

recordar la I Guerra del Golfo (en la que participaron soldados de reemplazo) y el unilateralismo de la intervención en Kosovo (con Solana en un papel principal).

Estos temas muestran cómo la esfera pública española se convierte en mero espacio de contienda partidaria y, peor aún, esta contienda se salda enfrentando a los gobernantes y la sociedad civil. Sorprende la facilidad con la que el Gobierno denunció «la politización» de las dos crisis. En lugar de reconocerla como la vía constitucional para negociar los conflictos, afirmó (como hacía el dictador) que los partidos creaban «enfrentamiento» (el espectro de la guerra civil) y «crispación» (el término socialista, heredado por el PP). Encausar judicialmente a una plataforma cívica por recoger dinero para la protesta suponía negarle los recursos para su autonomía política, precisamente aquello de lo que se acusó a NM. Y reveló que practicar el asistencialismo estaba mejor visto que exigir un Estado de Bienestar. La expulsión de los voluntarios desveló la hostilidad hacia la colaboración ciudadana que va más allá de la «solidaridad» descomprometida. Y, cuando el Gobierno afirmaba la manipulación de los manifestantes, presuponía su minoría de edad. Resurgió así el supuesto clave de las elites que pilotaron la transición: recelar de toda movilización y, en caso de producirse y no poder canalizarla, calificarla de antisistema. En definitiva, se puso nuevamente de manifiesto el lamentable rasgo de la cultura de las elites españolas de etiquetar como marginal toda manifestación política no institucionalizada. La estrategia del Yo o el caos, enunciada por todos los Presidentes de Gobierno desde la transición (habrá que ver cómo se comporta Zapatero, llegado el caso) es un legado de la dictadura. La oposición política o la movilización social en momentos de crisis, en lugar de ser fenómenos lógicos y asumibles por la democracia, se consideran «deslealtad» o «subversión». El calado de este discurso en la ciudadanía responde a un franquismo sociológico más persistente de lo que se quiere reconocer.

Como afirmaban hace años quienes fueron cargos del PP durante su periodo de Gobierno: «[La persistencia del consenso y de los vetos de la transición] producen una auténtica crisis en la función de los partidos políticos que, de ser vehículos de catalización de iniciativas o instituciones mediadoras entre el Estado y la sociedad, se ven continuamente desbordados o puenteados por la sociedad a la que cada vez más son incapaces de representar en su conflictividad».<sup>170</sup> En buena lógica, la protesta se afrontó con querrelas judiciales y violencia policial. Esta respuesta se puede calificar casi de guerracivilista.

Los ataques a NM señalan el empobrecimiento del debate público en España cuando la politización se tiñe de nacionalismo no españolista. Indignan las llamadas a la cohesión nacional (de hecho, cierre de filas) que han hecho todos los gobiernos frente a crisis del calado de la que hemos analizado. En tiempos del PSOE de González las intervenciones bélicas y la guerra sucia antiterrorista fueron esgrimidas como asuntos de Estado, merecedoras de consenso. Con el PP fueron moneda corriente las declaraciones que equiparaban la lucha contra ETA y Al Qaeda, batasunizando de paso a NM.

Pero todo dique es rebasado si el temporal no amaina o la mar de fondo sigue picada. En todo caso, el búnker se puede anegar si la marea sube lo necesario. Y tras el 11-M se demostró que para la gente no era indiferente la atribución de los atentados a ETA o Al Qaeda. El 13-M, tras la convocatoria desde el tejido social, el ciclo de movilización que había culminado en las últimas manifestaciones contra la guerra tuvo un clímax inesperado: la desobediencia civil en la jornada de reflexión.

La movilización ciudadana iniciada con los estudiantes contra la LOU en otoño de 2001, continuada con los trabajadores en primavera de 2002 (decretazo), redimensionada con Nunca Más ése mismo invierno y la protesta contra la guerra en la primavera de 2003 fue desactivada electoralmente. Pero mantuvo latente la oposición a un Gobierno que creía haber restado legitimidad a la oposición política y la movilización social. Hasta que la bunkerización de la esfera pública se hizo insoportable, un año más tarde. Ante la inminencia de las Elecciones Generales, ni los medios ni los partidos convencionales fueron capaces de desvelar, sin ambigüedades ni contradicciones, la identidad de quienes habían perpetrado el mayor atentado de la historia. Tampoco se denunció de forma abierta el intento gubernamental de lograr el “engaño masivo”, hasta nueve meses más tarde. Pero el 13-M la ciudadanía reventó las estructuras de la gestión de la información y superó el colapso de la esfera pública, buscando fuentes y usando medios alternativos.

En un libro contemporáneo a éste (Sampedro, 2005) demostramos que, en un contexto determinado (ocultación y manipulación de información con fuerte carga emotiva, sobre un suceso con ramificaciones internacionales y muy polémico para la opinión pública, ligado a una decisión inminente como el voto y precedido de un ciclo de intensas movilizaciones), las nuevas tecnologías de la información y la comunicación ofrecen a la ciudadanía dos funciones al margen de los medios convencionales. Primero,

<sup>170</sup> Se ha cumplido, por tanto, casi a rajatabla la advertencia que R. del Águila y R. Montoro hacían en su libro de *El discurso de la transición española*. CIS-S.XXI, Madrid, 1984, p. 251.

Internet rompió el control estatal sobre las grandes empresas de comunicación y facilitó acceder a información crítica, contradictoria con la que emitía el Gobierno y acataban el resto de gestores institucionales. Segundo, a través de los medios digitales de contra-información y los móviles se reactivaron las redes de confianza que se habían fraguado en las movilizaciones de los últimos cuatro años. Los días 12 y especialmente 13 de marzo, los ciudadanos fueron multitudes on line, conectadas en red. Y la marea humana impidió, esta vez, que cuajara el cemento de un nuevo búnker en la esfera pública.

Los efectos electorales de las concentraciones desobedientes del 13-M son ambigüos, pero uno resulta indiscutible: ayudaron a elevar el nivel de participación. El 14 de marzo acudió a las urnas todo aquel electorado que se venía movilizandando los últimos años y que, desencantado de la política formal, no estaba dispuesto a que la abstención fuera aprovechada, otra vez, por los mismos contra quienes ejercieron la protesta.<sup>171</sup>

---

<sup>171</sup> Finalmente, no podemos dejar de constatar que el cambio de Gobierno ha supuesto no sólo un cambio de la agenda política sino también en la de los medios de comunicación. En efecto, cuando se cumplía su segundo aniversario Tele 5 emitió reportajes especiales sobre el *Prestige*, así como *El País* y *El Mundo*. No deja de ser significativo que el tema reapareciera también en los medios públicos hasta el punto de ser objeto de titulares en los Telediarios de TVE y en cada boletín de RNE. Y, quizás lo más importante, que el nuevo Ejecutivo ha desbunkerizado el tema y ya se hacen afirmaciones desde la Administración que desmienten versiones anteriores (como que el chapapote no se ha reciclado o que no habrá Plan de Salvamento Marítimo en los plazos esperados). Habrá que ver cómo se desarrollan las compareencias en la Comisión de Investigación del Parlamento de Galicia y cómo se maneja electoralmente el Plan Galicia – una vez constatado la ficción presupuestaria que lo sustentaba - para calibrar el grado de apertura de la esfera pública.